

## **Petróleo, Expectativas y Organizaciones en la Crisis del Sistema Político Venezolano**

**MIRIAM KORNBLITH**

Hasta 1958, Venezuela fue un ejemplo extremo de inestabilidad política o de gobiernos dictatoriales.

Desde el inicio de su historia republicana en 1811, el país había disfrutado de tres agitados años de gobierno democrático entre 1945-48. Sin embargo, a partir de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 se logró establecer en el país un ordenamiento que, con sus limitaciones y deficiencias, es el que más se ha acercado al ideal republicano y democrático buscado desde la independencia<sup>1</sup>.

En ese contexto, las preguntas que durante mucho tiempo ocuparon a analistas de dentro y fuera del país fueron ¿cómo explicar el surgimiento- consolidación y maduración del régimen democrático en Venezuela habida cuenta de su pasada experiencia de inestabilidad y despotismo?

No obstante, los críticos eventos ocurridos durante el quinquenio 1989-1993 evidenciaron la existencia de una seria crisis socio política. La puesta en marcha de un severo programa de ajuste económico en 1989, el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y la agitación que le siguió; el segundo intento de golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992; la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 20 de mayo de 1993 de suspender al Presidente de la República y la posterior destitución del mismo por parte del Congreso y nombramiento de un Presidente provisional; los altos niveles de abstención registrados en las elecciones regionales de 1989 y 1992 y en las presidenciales de 1993, junto con el drástico cambio en la configuración político-electoral que resultó de este último proceso, constituyen algunas de las dramáticas señales de los cambios y rupturas ocurridos en el sistema político venezolano en los años más recientes.

<sup>1</sup> Carrera Damas Germán, "Venezuela Democracy in Historical Perspective", en: Tulchin Joseph, Gary Bland (Eds), *Venezuela in the Wake of Radical Reform*, Boulder, Woodrow Wilson Center, Lynne Wenner Publishers, 1993, pp. 21-28.

De modo que después de más de tres décadas de estabilidad, surgieron nuevamente dudas acerca de las posibilidades de sobrevivencia del ordenamiento democrático venezolano y se plantean diversas interpretaciones acerca de las razones que llevaron a las dificultades actuales<sup>2</sup>. Se formulan preguntas como ¿cuáles son los determinantes de la crisis del sistema político venezolano?, ¿qué lecciones se pueden extraer de los logros y de las deficiencias de los 35 años de vigencia del régimen democrático en el país?, ¿qué perspectivas de corto y mediano plazo se le plantean al sistema político venezolano?, ¿qué condiciones son necesarias para garantizar la estabilidad y legitimidad de la democracia en el país?

Este artículo constituye un esfuerzo por caracterizar y comprender la crisis del sistema político venezolano. Si desestimar el peso autónomo que las decisiones y procesos específicos del gobierno de Carlos Andrés Pérez y de cualquier otro hubieran podido tener en la ocurrencia de la crisis del sistema político, el examen se centra en la dimensión estructural, relativa a las modificaciones ocurridas en las reglas de juego y en las bases económicas, sociales y políticas sobre las que se asentó el ordenamiento sociopolítico venezolano desde 1958 hasta el presente<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Ver Velásquez Ramón J., Capriles Ayala Carlos y otros, *Cuándo se jodió Venezuela*, Caracas, Consorcio de Ediciones Capriles, 1992.

<sup>3</sup> La dimensión coyuntura/ y la estructural se abordan simultáneamente en: Kornblith Miriam, "Venezuela: Crisis sociopolítico, nuevas reglas de juego y estabilidad de la democracia", en: Murillo Gabriel (Ed). *Hacia la consolidación democrática andina: transición o desestabilización*, Santafé de Bogotá, Departamento de Ciencia Política, Universidad de Los Andes, Tercer Mundo Editores, 1993, pp. 241-292.

## **1. Las viejas reglas de juego y el sistema populista de conciliación de élites.**

Las reglas de juego fundamentales de nuestro ordenamiento sociopolítico fueron implantadas o propuestas a mediados de los años 40 y ratificadas con modificaciones más o menos significativas partir de 1958. En el trienio 1945-48 se consolidó la idea de la centralidad del Estado en el moldeado de la sociedad venezolana y en la definición de los principales rasgos de nuestro desarrollo socioeconómico. Igualmente se establecieron las bases para el funcionamiento de un orden pluralista en lo político, consagrándose en la Constitución de 1947 los preceptos relativos a la ampliación y respeto de los derechos políticos de los ciudadanos y las organizaciones; siendo éste uno de los aspectos más problemáticos de ese lapso.

El retomo a la democracia luego del decenio dictatorial significó retomar la senda del pluralismo político, pero también supuso cuestionar la forma como el mismo había sido comprendido y puesto en marcha entre 1945 y 1948.

A partir de 1958 se solidificó el acuerdo entre diversos sectores en torno a algunas reglas fundamentales. La regla de la mayoría como criterio absoluto para la toma de decisiones fue sustituida o complementada, según las circunstancias, por la regla de la unanimidad por los casos en los cuales estaban involucrados los intereses de los sectores minoritarios pero poderosos, con capacidad para vetar decisiones o amenazar la estabilidad del sistema<sup>4</sup>. Se le atribuyó al Estado un papel central en la estructuración de las principales coordenadas de la nación, la economía tuvo como factor dinamizador a la renta petrolera; al sector privado se le asignó un papel secundario en la activación de la vida económica. Mediante el Pacto de Punto Fijo se garantizó la plena vigencia del juego político electoral; los partidos políticos fungieron como principales y casi únicos- canales de agregación y articulación de intereses sociales, y como agentes privilegiados de mediación entre el Estado y la sociedad. En la Constitución de 1961 se consagraron muchos de estos principios y reglas, y sobre esas bases se diseñó un proyecto sociopolítico de largo alcance.

4 Rey Juan Carlos, "El futuro de la democracia en Venezuela", en: Rey Juan Carlos, *El futuro de la democracia en Venezuela*, Caracas Colección IDEA, 1989, pp. 249-323; Juan Carlos, "La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación", en: *Revista de Estudios Políticos*, N° 74, 1991, pp. 533-578.

La concreción de este diseño constitucional y de sus reglas formales e informales derivó en lo que Rey ha denominado el sistema populista de conciliación de élites. Este modelo se basó en el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos, y en la necesidad de su incorporación en el nuevo orden. El sistema dependió de la presencia y adecuada interacción de tres factores fundamentales: la abundancia de recursos económicos provenientes de la renta petrolera, con los que el Estado pudo satisfacer demandas de grupos y sectores heterogéneos; un nivel relativamente bajo y relativa simplicidad de tales demandas, que permitía su satisfacción con los recursos disponibles; y la capacidad de las organizaciones (partidos y grupos de presión) y de su liderazgo para agregar, canalizar y representar esas demandas, asegurando la confianza de los representados<sup>5</sup>.

La interacción de estos tres factores hizo posible la conciliación de intereses heterogéneos y dio lugar a un estilo decisorio basado en un complejo sistema de negociación y acomodación de intereses.

El sistema logró, por un lado, garantizar a los sectores minoritarios pero poderosos -Fuerzas Armadas, Iglesia, grupos empresariales, grupos laborales organizados, asociaciones gremiales- que sus intereses no se verían amenazados por la aplicación de la regla de la mayoría. La toma de decisiones gubernamentales que afectaban a estos sectores se basó en la aplicación de la regla de la unanimidad, y en la creación de un sistema de participación y representación semi corporativo a través del cual estos grupos podían ser atendidos sin tener

que transitar por los controles democráticos regulares. Por otro lado, se aseguró la confianza de la población en los mecanismos de la democracia representativa mediante el respeto a la regla de la mayoría en la selección de las autoridades gubernamentales, garantizando la regularidad y respeto a las elecciones <sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Rey, "La democracia venezolana", pp. 565-566.

<sup>6</sup> Rey, "El futuro" y Rey, "La democracia venezolana".

El orden resultante privilegió el consenso, la conciliación ínter elites, la evitación del conflicto y la aproximación pragmática a las decisiones políticas. La estabilidad política, la confianza de la población en el régimen democrático y en su liderazgo, y un relativo crecimiento económico fueron los principales logros de este modelo.

No obstante, también resultaron deficiencias significativas que en la actualidad emergen con agudeza: excesivo centralismo; desigualdad socioeconómica; clientelización de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y las organizaciones; participación de instituciones y decisiones; corrupción administrativa. Los cuestionamientos señalan uno u otro aspecto particular, o al conjunto de reglas y prácticas que sostuvieron a la democracia implantada desde 1958, a partir de una evaluación crecientemente negativa de los costos políticos, sociales, económicos, institucionales, morales derivados de tal orden <sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Ver entre otros: Brewer-Carías Allan R, *Problemas del Estado de partidos*, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1988; Hellinger Daniel, *Venezuela: Tarnished Democracy*, Boulder, Westview Press, 1991; Malavé Mata Héctor, *Los extravíos del poder. Euforia y crisis del populismo en Venezuela*, Caracas, Ediciones de la Biblioteca UCV, 1987; Romero Aníbal, *La miseria del populismo. Mitas y realidades de la democracia en Venezuela*, Caracas, Ediciones Centauro, 1987.

## **II. Crisis del sistema populista de conciliación de élites**

Tal como afirma Rey; cuando ocurre una modificación adversa en cualquiera de las variables básicas del modelo (renta petrolera. expectativas sociales y representatividad de las organizaciones) se produce una amenaza para la estabilidad del sistema que puede ser razonablemente compensada. Sin embargo, cuando ocurren modificaciones negativas simultáneas en los tres factores, el sistema sociopolítico se coloca en una situación límite en una crisis <sup>8</sup>.

La hipótesis central de este artículo es que en la actualidad estamos encarando tal situación límite. A lo largo de las tres décadas y media de régimen democrático, y especialmente durante los años 80, se fueron produciendo cambios en sentido negativo en las tres variables básicas del modelo, que en su interacción condujeron a la crisis del sistema político venezolano. En lo que sigue se examinan cambios y su contribución a la ocurrencia de la crisis del sistema político venezolano.

### **Crisis del modelo rentista.**

El modelo de desarrollo venezolano implantado desde mediados de los años 40 ha sido caracterizado como de capitalismo rentista? <sup>9</sup>. La explotación petrolera se vincula con la economía y la sociedad nacional como actividad productiva y como fuente rentista. Como actividad productiva incorpora trabajo, tecnologías, equipos y maquinarias, genera empleo y demanda bienes y servicios producidos en el país. Por el otro lado, la explotación petrolera ha sido una fuente de renta internacional exigida por el Estado venezolano, en tanto propietario de los recursos petroleros explotados en el territorio nacional. Esta segunda dimensión ha dominado la relación del estado y la sociedad con la industria petrolera, y de ella deriva la caracterización de nuestro modelo económico y sociopolítico como de capitalismo rentístico.

<sup>8</sup> Ver: Rey, "El futuro" y Rey, "La democracia venezolana".

9 La caracterización del modelo rentista y sus consecuencias en: Baptista Asdrúbal y Mommer Bernard, *El petróleo en el pensamiento económico venezolano. Un ensayo*, Caracas, Ediciones LESA, 1992, 2 Ed; Baptista Asdrúbal, "Tiempos de mengua. Los años finales de una estructura económica", en: Fundación Eugenio Mendoza, *Venezuela Contemporánea 1974-1989*, Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1989, pp. 105-153; España Luis Pedro, *Democracia y renta petrolera*, Caracas, UCAB, 1989; Espinaza Ramón, "Petróleo, economía e historia (Ensayo introductorio)", en: España, *Democracia*, pp. 9-53; Karl Terry. "Petroleum and Política; Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela", en: *Latin American Research Review*, Vol. 22, N° 1, 1987, pp. 63-94; Palma Pedro, *La economía venezolana en el período (1974-1988): ¿Últimos años de una economía rentista?*, en: Fundación Eugenio Mendoza, *Venezuela Contemporánea 1974-1989*, Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1989, pp. 157-248.

Desde la definitiva instalación de la industria petrolera en el país en los años 20 se verificó un proceso de pérdida de importancia relativa de la dimensión productiva del negocio petrolero, frente a su dimensión rentista. Sin embargo, a lo largo de los años 80 tuvo lugar el colapso de la renta. Ello resultó de dos procesos: la inestabilidad y tendencia al decrecimiento de los precios en el mercado petrolero y en los patrones de oferta y demanda internacional de hidrocarburos; y, por otro lado, el incremento y complejización de los compromisos económicos y sociales del Estado venezolano, cuya satisfacción ya no es posible exclusivamente a expensas del ingreso petrolero. Esta limitación se hace evidentemente en el hecho de que en 1981 los ingresos petroleros per cápita alcanzaban a \$1.631, mientras en 1993 descendieron a \$ 529.

Las consecuencias de la operación del modelo rentista en la dinámica económica, socio política, cultural, institucional del país han sido profundas; contradictorias y variadas; sólo destacaré algunas de ellas <sup>10</sup>.

El Estado se amoldó y se formó según la dinámica rentista <sup>11</sup>. Este modelo exigió al Estado de enfrentar la disyuntiva de extraer recursos de un sector de la sociedad para transferirlos a otro. El origen externo del ingreso fiscal y su abundancia permitieron atender de manera relativamente satisfactoria, aunque evidentemente desigual, las demandas y expectativas de diversos sectores sin generar los conflictos distributivos característicos de otras realidades, y sin incluir significativamente consideraciones de eficiencia y productividad en tales asignaciones.

10 El tratamiento de otras vertientes del impacto del modelo rentista en: Briceño León Roberto, *Los efectos perversos del petróleo*, Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1990; Pérez Schael María Sol, *Petróleo, cultura y poder en Venezuela*, Caracas, Monte Avila Editores Latinoamérica, 1993; Jrbaneja Diego Bautista, *Pueblo y petróleo en la política venezolana*, Caracas, Ediciones CEPET, 1992.

Los mecanismos utilizados por el Estado para transmitir esta renta al conjunto de la sociedad y mantener el equilibrio socio político en su distribución fueron varios. El gasto público, en tanto generador de sueldos y salarios (gasto corriente) e inversión productiva y en infraestructura (inversión pública), y en su expresión como préstamos, subsidios, exoneraciones para transferir directa e indirectamente recursos fiscales a diversos sectores. La sobrevaluación del tipo de cambio y la libertad cambiaria, que permitieron subsidiar la compra de moneda extranjera y la adquisición de insumos, bienes y servicios en el exterior, especialmente para apoyar la industrialización por sustitución de importaciones. Finalmente el bajo nivel de tributación interna, en particular el bajo nivel de contribución al impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas, a excepción de la industria petrolera <sup>12</sup>. El uso de estos mecanismos se basó en la aplicación de tres reglas relativamente sencillas para la toma de decisiones y manejo de la política macroeconómica: el gobierno gastaba lo que ingresaba; el tipo de cambio se mantenía fijo y único respecto del dólar, las tasas de interés también se mantenían fijas <sup>13</sup>.

11 Ver: Blanco Carlos, "Las transformaciones del Estado venezolano", en: Blanco Carlos (Coord), *Venezuela, del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla*, Caracas, COPRE-PNUD- Editorial Nueva Sociedad, 1993, pp. 63-81.

12 Baptista "Tiempos de mengua", pp. 122-125.

13 Hausmann Ricardo, "Sobre la crisis económica venezolana", en: Rey Juan Carlos, Barragán Julia y Hausmann Ricardo, *América Latina. Alternativas para la democracia*, Caracas, Monte Avila Editores, 1992, pp. 99-100.

En este modelo el Estado adquirió una discrecionalidad, centralidad y visibilidad extremas. En ello confluyen además del manejo relativamente autónomo de ingentes recursos de origen externo, el predominio de criterios ideológicos que privilegiaban la noción del Estado de bienestar y la debilidad económica del sector empresarial. Se desarrolló un Estado hiperactivo, cuya vocación intervencionista se plasmó después de 1958 en el veloz crecimiento de la administración descentralizada, compuesta por aproximadamente 500 entes de variada forma jurídica, a través de los cuales el Estado asumió funciones convencionales de un estado de bienestar, hasta la intervención directa en actividades menos convencionales como la producción de hierro, petróleo, hoteles y bancos <sup>14</sup>.

La administración descentralizada se amoldó a la tarea de satisfacer diversos intereses socioeconómicos e incluir sectores específicos en la formulación de la política pública, creándose un sistema semi corporativo de toma de decisiones al interior de la administración pública <sup>15</sup>. También se convirtió la administración descentralizada, al igual que la central, en una fuente importante de ineficiencia y corrupción.

Al recortarse el ingreso petrolero tanto en términos absolutos como relativos, se produjo una reducción concomitante de la capacidad del Estado para atender las variadas demandas sociales y expandirse hacia nuevas áreas. Ello en una situación en la que la hipertrofia estatal había generado ineficiencias múltiples y compromisos cada vez más difíciles de cumplir, que se convirtieron en costosos lastres políticos y económicos.

14 Ver Komblith Miriam, Maigón Thais, *Estado y gasto público en Venezuela. 1936-1980*, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1985.

15 Ver: Bigler Gene, *La política y el capitalismo de Estado en Venezuela*, Madrid, Tecnos, 1981; Crisp Brian, *Tyranny by the minority: Institutional Control of Participation in the Venezuelan Democracy*, Michigan, The University of Michigan, 1992 (Tesis doctoral inédita).

La enorme visibilidad del Estado venezolano hace que el mismo sea directamente responsabilizado por las penurias económicas de los sectores afectados por la disminución de los recursos fiscales; de allí que la desconfianza y el descrédito en los gestores públicos tradicionales sea muy alta. Por otro lado, la competencia por los recursos cada vez más escasos genera conflictos, donde las ganancias de unos sectores redundan en las pérdidas de otros. La sociedad venezolana se encuentra en transición desde una situación semejante a la de un juego suma-variable-positivo, en el que los actores podían repartirse las ganancias de un ingreso en continuo aumento, a una situación semejante ala de un juego suma-cero o suma-constante-negativo, donde las ganancias de unos representan las pérdidas de otros, donde habrá que repartirse las pérdidas <sup>16</sup>. Ello significa que, a diferencia del pasado, es cada vez menos posible asegurar la armonía social y política a través del ingreso petrolero y de la función mediadora del Estado <sup>17</sup>.

A raíz de estos cambios se pusieron en marcha procesos de reestructuración del sector público, como la privatización y la descentralización, la reforma fiscal y tributaria y la redefinición de las prioridades, mecanismos y reglas de la acción estatal, algunas de las cuales fueron formuladas en el programa de ajustes lanzado por el gobierno de Pérez en febrero de 1989 y por el programa de gobierno que los acompañó <sup>18</sup>.

No obstante, la negociación en torno a estas cuestiones ha sido ardua. Un contexto de escasez de recursos genera grandes tensiones y frustraciones, que no son fácilmente canalizables a través de mecanismos, instituciones y reglas diseñados para tiempos de abundancia <sup>19</sup>.

16 Rey, "El futuro", pp. 275-282.

17 Ver Naím Moisés, Piñango Ramón (Dir), *El caso Venezuela: ¿Una ilusión de armonía?*, Caracas, Ediciones IESA, 3ra ed, 1986.

18 Ver CORDIPLAN, VIII Plan de la Nación.

19 La caracterización del programa de ajustes y de las dificultades que endentó su aplicación en: Naim Moisés, *Paper Tiger and Minotaurs: The Politics of Venezuela's Economic Reforms*, Washington, The Carnegie Endowment for Interantional Peace, 1993.

## **Crisis en el modelo socioeconómico y en las expectativas sociales.**

La experiencia democrática se inició en Venezuela en un contexto de precariedad institucional y de carencia de prácticas y hábitos pluralistas. De este modo, el liderazgo político además de resaltar los valores intrínsecos de la democracia, como la libertad de expresión o el derecho a elegir las autoridades públicas, enfatizó el desarrollo de mecanismos utilitarios de integración al régimen político como fórmula para generar apoyos al mismo. Así, se estableció una correspondencia estrecha entre democracia política y desarrollo socioeconómico. Se argumentaba que, en contraste con lo ocurrido durante la década dictatorial, la democratización de los canales de acceso al gobierno y al Estado mediante elecciones regulares e imparciales, garantizaría la democratización de la política económica y social, de modo de asegurar al conjunto de la población el acceso a la riqueza social <sup>20</sup>.

Los abundantes recursos fiscales le conferían una base objetiva a tal formulación. La apuesta, tácita o explícitamente formulada, era que en la medida en que el régimen democrático fuese capaz de demostrar su superioridad al generar mayor riqueza social y garantizar mayores niveles de bienestar a la población, el mismo sería preferido frente a opciones autoritarias, y se podría asegurar la confianza de la población en el orden democrático. En el mediano y largo plazo, ese vínculo inicialmente basado en consideraciones utilitarias, podría transformarse en un vínculo valorativo <sup>21</sup>.

Estos criterios tuvieron una traducción en la formulación de políticas públicas, en particular de la política social. Se le asignó un papel fundamental al Estado en el diseño y puesta en práctica de la política social. Más que la eficiencia en el uso de los recursos, se enfatizó su capacidad de generar adhesiones; y la política social se adscribió estrechamente a las funciones de incorporación y legitimación de la democracia, y a las necesidades de sus actores y procesos claves. La mediación entre la población y el Estado en el campo de la política social se ejerció a través de los partidos políticos y las estructuras gremiales y sindicales asociadas con la prestación directa de los servicios, sociales o con su formulación, ubicadas en los ministerios e institutos vinculados al sector.

<sup>20</sup> Rey ha destacado la importancia de los mecanismos utilitarios en la generación de apoyos al régimen democrática. Ver Rey, "El futuro", pp. 257-260 y Rey, "La democracia venezolana", p. 543.

<sup>21</sup> Rey, *ibid.*

El Estado creó una extensa y compleja red asistencial. La población accedió a estos servicios, disfrutándolos desigualmente de acuerdo con la calidad y cobertura de los mismos. Como resultado más visible de este estilo de formulación y puesta en práctica de la política social se elevaron los índices de alfabetización, escolarización, salubridad, natalidad, crecimiento socio biológico. Si bien es cierto que las brechas entre los sectores más favorecidos y los menos favorecidos se ensanchaban, también ocurrió que la población de menores recursos logró elevar sus niveles de vida y acceder a un conjunto de beneficios sociales, ofrecidos a través del gasto público y por la generalización de subsidios a un conjunto de bienes y servicios.

Los umbrales desde donde se partía al inicio de los años 60 eran bastante bajos, al igual que las expectativas de la población respecto de su posible mejoramiento socioeconómico. Las décadas de los años 60 y 70 fueron de relativa distribución de riqueza en el conjunto de la población <sup>22</sup>. Dada la distribución regresiva del ingreso, las transferencias de recursos y las políticas asistenciales componían una parte más significativa del ingreso de los sectores de menores recursos que de los de mayores recursos <sup>23</sup>. De este modo se produjo la elevación del nivel socioeconómico de importantes sectores de la población, generándose no sólo modificaciones de status en sentido positivo, sino grandes expectativas acerca de las

posibilidades del modelo socioeconómico para seguir alimentando esa marcha ascendente e ininterrumpida en el disfrute del bienestar colectivo.

22 Ver: Valecillos Héctor, "Regresión en la distribución del ingreso. Perspectivas y opciones de política", en: Nissen Hans-Peter y Mommer Bernard (Coord), ¿Adiós a la bonanza? Crisis y distribución del ingreso en Venezuela, Caracas, MDIS-CENDES-Editorial Nueva Sociedad, 1989, pp. 63-93.

23 Para un examen de las paradojas y distorsiones de la política social ver: Navarro Juan Carlos, Robin Hood al revés. Realidades y paradojas del estado redistribuidor en Venezuela, ponencia presentada en el Simposio LESA-CORPOVEN, Los pobres: La mayoría desaprovechada, Caracas, IESA, 27-28 Noviembre 1992.

Estos evidentes avances agregados resultaron significativos tanto desde el punto de vista de su impacto global- como respecto a la formación de expectativas de mejoramiento socioeconómico individual, familiar y grupal. Con ello la ecuación optimista entre desarrollo económico y adscripción a la democracia logró implantarse y producir beneficios.

No obstante, la combinación entre recursos fiscales menguados e ineficiencias acumuladas en el uso de los recursos disponibles y la progresiva pérdida de autonomía de la política social en favor de los intereses partidistas y gremiales, derivaron en los años 80 y lo que va de los años 90 en estancamientos y/o decrecimientos significativos en los principales indicadores de bienestar individual y colectivo <sup>24</sup>, junto con la quiebra de los servicios públicos como los sistemas de salud y educación, los servicios de transporte y comunicación, y los servicios de aguas, drenaje y basura.

El indicador sintético más contundente de este decaimiento es el crecimiento de la población en situación de pobreza. La proporción de hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza se incrementó de 17,73% en 1981 a 34,64% en 1991; y dentro de este grupo la proporción de hogares en situación de pobreza extrema pasó de 3,67% en 1981 a 11,18% en 1991, mientras los hogares en situación de pobreza crítica pasaron de 14,06% en 1981 a 23,46% en 1991, aumentando así la población en situación de pobreza extrema o indigencia durante la década <sup>25</sup>.

24 La situación de los indicadores socio biológicos y nutricionales en: Dehollain Paulina, Pérez Schael Irene, Venezuela desnutrida hacia el año 2000, Caracas, Alfadil Ediciones, 1990.

25 Datos de: Márquez Gustavo, Pobreza y políticas sociales en Venezuela, ponencia presentada en el simposio LESA-CORPOVEN, Los pobres: La mayoría desaprovechada, Caracas, IESA, 27-28 de noviembre de 1992.

Tanto los mecanismos de mercado, la intervención del Estado y los esquemas política-organizativos convencionales demostraron su fragilidad y limitaciones para asegurar niveles adecuados de bienestar a la población <sup>26</sup>. Ello obligó a formular reconsideraciones drásticas en el ámbito de la política social, que vinieron asociadas con el programa de ajustes y con la necesidad de mitigar los impactos negativos inmediatos que el mismo acarreo a la población de menores recursos <sup>27</sup>.

La quiebra del modelo socioeconómico y la frustración de las expectativas de mejoramiento socioeconómico individual y colectivo erosionaron la adhesión de la población al régimen democrático, cuya suerte estuvo peligrosamente atada al éxito del uso de mecanismos utilitarios para la generación de apoyos al régimen.

Si bien las señales de declive socioeconómico eran evidentes a mediados de la década de los años 80, especialmente después del llamado "viernes negro" de febrero de 1983, cuando ocurrió la primera devaluación drástica del bolívar, los gobiernos de esos años no emprendieron programas serios y sistemáticos de ajuste económico <sup>28</sup>; y por otro lado, en parte como consecuencia de lo anterior, la población siguió confiando masivamente en el régimen democrático y en sus principales gestores, AD y COPEI, según se desprende del comportamiento electoral de esa década.

Sin embargo; al calor del deterioro acumulado de las condiciones de vida de la población se estaba gestando una peligrosa desafección respecto de la democracia <sup>29</sup>. El estallido del 27 de febrero de 1989 fue interpretado por muchos como una dramática señal del descontento de la

población y de la peligrosidad del mismo para la estabilidad de la democracia <sup>30</sup>, igualmente las simpatías despertadas por los golpistas del 4 de febrero de 1992.

26 Ver Cartaya Vanesa y D'Elía Yolanda, *Pobreza en Venezuela: Realidad y políticas*, Caracas, CESAP-CISOR, 1991.

27 Padrón Marisela, "Venezuela: Crisis, ajuste, y política social", en: *Primer encuentro latinoamericano y del Caribe de Primeras Damas*, Caracas, 1991.

28 Ver: Rodríguez Miguel, "Public sector behavior in Venezuela", en: Larraín Felipe, Selowsky Marcelo (Eds), *The Public Sector and the Latin American Crisis*, California, internacional Center for Economic Growth, 1991, pp. 237-281.

29 Cariola Cecilia (Coord), *Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión*, Caracas, CENDES-Editorial Nueva Sociedad, 1992.

30 Ver: Komblith Minan, "Deuda y democracia en Venezuela: Los eventos del 27 y 28 de febrero de 1989", en: *Cuadernos del CENDES*, N° 10, 1989, pp. 17-34.

Las relaciones entre la esfera económica y la política no son lineales ni inmediatas, pero existen. Así como la población tardó en reaccionar en contra del status sociopolítico, a pesar del decaimiento socioeconómico, es difícil que recupere su confianza en el mismo, aun cuando se presenten señales de mejoramiento socioeconómico. La riesgosa dependencia que se estableció entre el éxito económico del modelo democrático y la adhesión de la población funcionó adecuadamente mientras el modelo fue capaz de producir bienestar y las expectativas de la población fueron medianamente atendidas. En un contexto signado por las dificultades económicas, será necesario generar otros mecanismos de adhesión, y reconocer que la estabilidad del sistema político está negativamente afectada por las carencias socioeconómicas.

### **Crisis en el modelo de representación y de legitimidad**

Como ya fue dicho, una de las variables cruciales para el funcionamiento del sistema populista de conciliación de élites fue la existencia de un número relativamente pequeño de organizaciones confiables, con capacidad para agregar; canalizar y representar los intereses de diversos sectores de la población, así como la presencia de un liderazgo hábil, representativo y capaz de generar acuerdos entre sí. La presencia de esas organizaciones (partidos, gremios, asociaciones de intereses) generó una democracia hiper organizada y elitista <sup>31</sup>.

31 Expresión de Rey, "La democracia venezolana", p. 547.

No obstante, en la actualidad las organizaciones partidistas más poderosas, Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), así como las organizaciones que representan intereses específicos, como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (FEDECAMARAS) para el sector empresarial y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) para el sector sindical, han ido perdiendo gran parte de su capacidad para agregar, canalizar y manejar las demandas e intereses de los sectores a los que supuestamente representan. A su vez, al interior de cada una de estas organizaciones se ha resquebrajado la disciplina interna, se cuestiona el liderazgo tradicional, y se reduce el margen de maniobra y representatividad del mismo. En la medida en que los intereses y expectativas sociales se han complejizado y diferenciado, los diversos sectores requieren de varias organizaciones para representarlos, lo que incrementa el número y diferencias de los actores involucrados, fracciona el liderazgo sectorial, y genera patrones de negociación más complejos, costosos y menos predecibles.

De todas estas organizaciones las de mayor importancia y visibilidad en el ordenamiento sociopolítico venezolano han sido los partidos políticos, en particular AD y COPEI. Por esa misma razón, son las organizaciones más cuestionadas; aunque no son las únicas.

Tanto a nivel de práctica política como de principios jurídicos y constitucionales, los partidos políticos adquirieron una posición privilegiada en el sistema político venezolano. Se

configuraron como organizaciones poli clasistas, de alcance nacional, con estructuras jerárquicas, centralizadas y disciplinadas. Este fue el modelo desarrollado inicialmente por Acción Democrática en los años 40, y que se impuso al resto de los partidos con independencia de su filiación ideológica. Los partidos se convirtieron en los principales canales de vinculación entre el Estado y la sociedad civil, en los agentes de socialización de la población en los valores y prácticas democráticas, y en las organizaciones de articulación y representación de intereses sectoriales. Los partidos adquirieron una centralidad y relevancia únicos en comparación con otros sistemas políticos <sup>32</sup>.

Sin embargo, a pesar de los importantes logros que el sistema político y el sistema de partidos venezolanos puede exhibir, tanto si se lo compara con su desempeño anterior a 1958, como respecto a otros países de América Latina, en el presente prevalece una visión crítica de los mismos <sup>33</sup>.

El cuestionamiento incluye el rechazo a la partidocracia, corrupción, pragmatismo, burocratismo, clientelismo, etc. se argumenta que la excesiva dominación de los partidos constriñó a la sociedad civil, que el liderazgo partidista quedó rezagado respecto del crecimiento político e intelectual del resto de la sociedad, que los partidos devinieron en organizaciones exclusivamente centradas en sus propios intereses político-electorales, convirtiéndose en maquinarias pragmáticas y corruptas, ajenas a controles democráticos y éticos, etc. <sup>34</sup>.

El liderazgo partidista se estancó, tanto desde el punto ideológico como generacional, y aún ocupan altas posiciones jerárquicas individuos que iniciaron sus carreras políticas en los años 30 y 40 <sup>35</sup>. La maximización del poder de los partidos y la concentración de la decisión en la cúpula dirigente redujeron el control del ciudadano sobre la dinámica interna de los partidos y sobre el desempeño de las autoridades electas <sup>36</sup>. La disciplina partidista limitó la capacidad de los elegidos para responder directamente a las demandas del electorado.

32 Ver: Rey Juan Carlos, "El papel de los partidos políticos en la instauración y el mantenimiento de la democracia en Venezuela", ponencia presentada en la Conferencia Interamericana de Sistemas Electorales, organizada por Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) y Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). Caracas, 15-19 mayo, 1990.

33 Ver: Komblilh Mirian y Levine Daniel, "Venezuela: The Life and Times of the Party System", Kellogg Institute, Notre Dame University, Working Paper N° 197, 1993, próximo a publicarse en Mainwring Scott y Thimothy Scully (Eds), Building Democratic Institutions: Parties and Party Systems in Latin America, Stanford, Stanford University Press, 1994 (en prensa).

34 Ver: Marta Sosa Joaquín, "Partidos democráticos de nuevo tipo y necesidad de lo nuevo en los partidos", en Blanco, Venezuela, pp. 45-62.

35 Ver: Marlz Jolui, "Party Elites and Leadership in Colombia and Venezuela", en Journal of Latin American Studies, vol 24, N° 1, 1992, pp. 87-121.

36 Ver: Molina Vega José Enrique, El Sistema electoral venezolano y sus consecuencias políticas, Valencia IIDH-CAPEL-Vadell Hermanos, 1991.

Los altos costos de la campaña electoral crearon un conjunto de "barreras de entrada" económicas a los grupos políticos de menores recursos, por lo que en la práctica el sistema no garantizó igualdad de oportunidades político-electorales y generó una tendencia a la oligopolización del juego político; igualmente estos costos indujeron al financiamiento privado de las campañas y de las actividades regulares de los partidos, generándose por esa vía un conjunto de compromisos espúreos entre los partidos y sus financistas privados <sup>37</sup>.

Las dificultades económicas de la década de los 80 y la implantación de un programa de austeridad económica a partir, de 1989, luego de sucesivas olas de bonanza petrolera de las décadas de los años 70 y 80, llevaron a cuestionar la capacidad de los partidos políticos como administradores de la cosa pública, más aún en el contexto de denuncias frecuentes de corrupción administrativa.

En síntesis, pareciera que justamente aquellos rasgos que permitieron que se consolidara el sistema de partidos y se asegurara la representatividad y legitimidad de los mismos, están

mostrando en el presente sus aristas más negativas y son motivo de rechazo por parte de la población.

En parte como intento de subsanar las deficiencias señaladas, se introdujeron importantes reformas al sistema político. Estas reformas son la elección separada de Concejos Municipales en 1979, la elección directa de Gobernadores de estado y de alcaldes en 1989, la reforma de la Ley Orgánica del sufragio en 1989 y 1993 para introducir el voto preferencia/ y el uninominal a nivel de cuerpos colegiados a nivel municipal y en la Cámara de Diputados. Igualmente, al interior de los partidos estas reformas político-electorales tuvieron repercusiones importantes, como la mayor participación de los liderazgos regionales, una mayor disposición a la consulta de la base para la selección de las autoridades internas y de los candidatos a ocupar cargos públicos.

37 Ver Rey, "El futuro", pp. 298-304.

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientemente contundentes como para convencer a la población de las bondades del sistema de partidos vigente. La creciente desafección con los partidos, en particular con AD y COPEI, se refleja en las encuestas de opinión <sup>38</sup>. y en los comportamientos electorales recientes. Venezuela exhibía hasta hace poco con orgullo sus altos niveles de participación electoral, de alrededor del 90% de la población votante. Sin embargo, a partir de la primera elección separada de los Concejos Municipales y en los procesos electorales subsiguientes, tanto a nivel nacional, como a nivel local se han incrementado los niveles de abstención en el país. En las elecciones nacionales de 1988 la abstención pasó al 18,3%, y en 1989, en los primeros comicios para seleccionar gobernador de estado, alcalde y autoridades municipales alcanzó el 54,96% y en las de 1992 el 50,84%. Finalmente en las elecciones nacionales de 1993 la abstención llegó al 39,8% <sup>39</sup>.

Otra tendencia resaltante de los últimos procesos electorales es el quiebre del bipartidismo de AD y COPEI, en operación desde 1958, pero hegemónico desde 1973 <sup>40</sup>. Y la presencia de partidos de oposición al gobierno de turno en posiciones de poder, por efecto de las elecciones directas de gobernadores y alcaldes <sup>41</sup>. En los comicios de 1989 el Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo 1 Gobernador de estado y uno la Causa Radical (Causa R). En el proceso electoral de 1992, caracterizado por un ambiente de crisis post-golpista y de severo cuestionamiento al gobierno de Pérez (AD), los resultados globales favorecieron a AD y especialmente a COPEI, quien obtuvo 11 gobernaciones, mientras que a AD le correspondieron 7, 3 al MAS y 1 a la Causa R, además de la importante alcaldía de Caracas.

38 La evolución de la opinión pública respecto de los partidos y la democracia se examina en: Baloyra Enrique, "Public Opinion and Support for the regimen: 1973-83, en: Martz Jolm y Myers David (Eds), Venezuela. The Democratic Experience (Revised Edition), New York, Praeger Publishers, 1986, pp. 54-71; Encuesta Data Analysis C.A. ordenada por la COPRE después de las elecciones Municipales de 1989; Myers David, "Percepciones de una democracia bajo presión: ¿decadencia inevitable o refundación?, en: Serbín Andrés, Stambouli Andrés, McCoy Jennifer, Smith William (Eds), Venezuela: la democracia bajo presión, Caracas, INVESP/North-South Center (Universidad de Miami)/Editorial Nueva Sociedad, 1993, pp. 43-69; Templeton A., The Evolution of popular Opinion, ponencia presentada en la conferencia The Lessons of Venezuela, organizada por the American University y Woodrow Wilson Center for International Scholars, Washington D.C, octubre 19-20, 1992; Torres Arístides, "La evolución de las actitudes hacia el sistema político", en: Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), Venezuela, democracia y futuro. Los partidos políticos en la década de los 90, Caracas, COPRE, 1993, pp. 173-186.

39 Los datos de las elecciones de 1993 en: Consejo Supremo Electoral, Elecciones 1993. Resultados, Dirección General Sectorial, Información Electoral, s.f. (mimeo).

No obstante, un corte realmente significativo en la dinámica bipartidista y de otros aspectos de la dinámica político-electoral tuvo lugar con ocasión de las elecciones presidenciales y legislativas de 1993.

En primer lugar, Rafael Caldera, logró una apretada victoria con el 30,46% de los votos. Luego de romper con COPEI, el partido que había fundado y del que había sido principal líder, se presentó como el candidato de una nueva agrupación Convergencia, y de diversas organizaciones de izquierda, el MAS, independientes y a antiguos miembros de COPEI. Le

siguieron en orden de llegada Fermín (AD) con 23,60%, Alvarez Paz (COPEI) con 22,73% y Velázquez (CR) con el 21,95% de los votos. Es decir, por primera vez desde 1958 obtuvo la victoria un candidato no apoyado por las maquinarias partidistas de AD o de COPEI -aunque Caldera arrastró segmentos organizativos y de votación de COPEI- y, por primera vez desde 1968, un candidato presidencial de izquierda o anti status, como Andrés Velásquez, obtuvo más del 20% de los votos <sup>42</sup>. Desde 1973 el tercer lugar en la contienda presidencial había sido ocupado por candidatos de izquierda, cuyas votaciones en sus mejores momentos apenas excedieron el 5% del total.

40 Ver: "Continuidad Y cambio en las elecciones venezolanas: 1958-1988", en: Caballero Manuel y otros, Las elecciones presidenciales (¿La última oportunidad o la prúnera?), Caracas, Grijalbo, 1989, pp. 11-119.

41 Komblith y Levine, "be Life and Times".

42 Las elecciones de 1968 se asemejan en varios aspectos alas de 1993. La victoria la obtuvo Rafael Caldera, por COPEL con el 29,13% de los votos, seguido por Gonzalo Barrios (AD) con 28.24%, Burrelli Rivas (FDP) con 22,22% y Luis Beltrán Prieto (MLP, una división de AD) con el 19,34% de los votos. Dada la dispersión del voto ocurrida en las elecciones de 1968 algunos analistas sostuvieron que era inminente el fraccionamiento político-electoral en el país. No obstante, en las elecciones siguientes ocurrió un abrumador triunfo del bipartidismo, concentrando AD y COPEI mas del 80% de los votos a nivel presidencial. En las elecciones del 1993 el voto se dispersó entre 5 opciones, quedando una relación relativamente pareja entre las mismas. No obstante desaparecieron muchas agrupaciones pequeñas por efecto de la aplicación del voto mayoritario, por lo que es previsible que nuevamente se imponga el bipartidismo, aunque incluyendo a actores distintos de AD y COPEI y con diferencias regionales marcadas.

Como resultado de este patrón de votación y por la aplicación del voto uninominal en un 50% para elegir los representantes a la Cámara de Diputados se produjeron resultados novedosos en la composición de los cuerpos legislativos, que a su vez afectan las relaciones entre los poderes ejecutiva y legislativo. El Presidente electo no cuenta de entrada con el respaldo mayoritario de un partido o de una coalición en el Congreso. A nivel parlamentario los porcentajes obtenidos por los principales partidos fueron: AD 23,34%; COPEI 22,62%; Causa R 20,68%; Convergencia 13,60% y MAS 10,81%. Un cuadro muy distinto de aquél en el que el gobierno contaba con mayoría absoluta en las Cámaras, o cuando entre AD y COPEI controlaban entre el 70 y el 80% de los puestos del Congreso.

De todo este panorama destacan tres tendencias importantes: el incremento de la abstención, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local; el decrecimiento de AD y COPEI, que aunque aún predominan en el conjunto, se encuentran en franco declive respecto de su pasado reciente; y el crecimiento de la Causa R, cuyos avances lucen más significativas aún si se considera que ocurrieron en algunos de los estados más poblados y urbanizados del país, como Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Federal y Miranda.

El cambio en los patrones de comportamiento y preferencias político-electorales refleja la crisis por la que están atravesando las organizaciones partidistas tradicionales, y con ellas las bases y reglas fundamentales de funcionamiento del modelo sociopolítico. Estos cambios están planteando tendencias sociopolíticas originales e importantes. En el ámbito democrático: el surgimiento de nuevas opciones organizativas y la redefinición de las relaciones inter e intra partidistas, junto con el surgimiento de diferentes formas de agrupación dentro de la sociedad Civil <sup>43</sup>. Fuera del ámbito democrático, cierta revalorización de la opción militarista y revolucionaria.

Es prematuro predecir cuál puede ser el desenlace de estos procesos. Las opciones diferentes a AD y COPEI no están suficientemente arraigadas, y ni la Causa R con su gran caudal de votos y de representantes ha sido capaz de proponer una alternativa consistente. Las diversas agrupaciones pequeñas de nuevo y viejo cuño tuvieron una paupérrima figuración electoral. A pesar de todos los presagios negativos y de las dificultades reales y anunciadas, hasta el momento el Presidente Caldera ha conservado e incrementado su popularidad, y progresivamente se ha acercado a los partidos del status, especialmente a AD, habiéndose suavizado los temidos impases entre el ejecutivo y el legislativo. Por su parte, la figura de Hugo Chávez, líder del intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, tiene

simpatizantes a nivel de encuestas de opinión, pero su opción no se ha estructurado organizativamente.

43 Sobre la sociedad civil ver: Gómez Luis, "Los movimientos sociales: democracia emergente en el sistema político venezolano", en: Silva Michelena José Agustín (Ed), Venezuela hacia el año 2000. Desafíos y opciones, Caracas, Editorial Nueva Sociedad-ILDIS,1987,pp.337-367;Navarro Juan Carlos, New Political Actors in Venezuela, ponencia presentada en la Conferencia Lessons from the Venezuela Experience, patrocinada por el Woodrow Wilson Center, Washington D.C., octubre 19-21,1992 (mimeo); Salamanca Luis, El sistema político venezolano: Una lectura desde la sociedad civil, ponencia presentada en la Conferencia La democracia bajo presión: Política y mercado en Venezuela, patrocinada por el INVESP y el North-South Center, Miami University , Caracas, 9-11 noviembre 1992 (mimeo); Santa Elías, Una red para la conspiración transparente, Caracas, 1992; Hernández Carlos Raúl, "De la sociedad tutelada a la sociedad desatada la rebelión de la sociedad civil", en: Blanco, Venezuela, pp. 105-120.

Se trata de una situación en la que la viejas organizaciones han perdido su arraigo popular, su atractivo ideológico y su capacidad para satisfacer las necesidades pragmáticas de la población, mientras que las nuevas organizaciones no han podido ocupar el espacio dejado por aquellas<sup>44</sup>. En el plano político-electoral esta realidad se expresa en los crecientes niveles de abstención y en la atracción que ejercen individualidades u organizaciones enfrentadas al status quo político y económico. En el plano sociopolítico más amplio se verifican procesos de alienación de amplios sectores de la población, cuya participación en el orden sociopolítico ocurre a través de demostraciones violentas y anónimas (saqueos, tomas, violencia urbana) que transcurren al margen de las organizaciones tradicionales. La democracia venezolana, caracterizada hasta hace poco como "hiperorganizada y elitesca" ha ido perdiendo ese perfil.

#### **IV.- Balance y conclusiones**

El cúmulo de transformaciones vividas en el sistema político venezolano en la última década y las expresiones de crisis de los años más recientes contienen tendencias contradictorias. Por un lado, en la crítica al modelo democrático vigente desde 1958 hay indicios de maduración y crecimiento democrático en la población y en algunas organizaciones -nueva y viejas- que apuntan hacia la búsqueda de un orden más pluralista y equitativo. Diversos intentos de reforma socioeconómica e institucional apuntan en ese sentido, junto con el surgimiento de nuevas organizaciones sociales.

No obstante, la crítica a las reglas, comportamientos y estructuras que sirvieron de soporte al llamado sistema populista de conciliación de élites, ha llevado a algunos sectores e individualidades a cuestionar a la democracia per se o a dudar de su viabilidad en Venezuela, y a la búsqueda de opciones no democráticas de manera abierta o soterrada. Los intentos golpistas y las diversas expresiones de simpatía recibidas por los mismos forman parte de esta tendencia, aunque aún en estos casos el discurso prevalente es de reconocimiento de la democracia como el régimen político más valioso y deseable.

44 Urbaneja Diego Bautista, "La construcción de fuerzas políticas representativas", en: Encuentro Nacional de la Sociedad Civil, Encuentro y alternativa. Venezuela, 1994, Caracas, Conferencia Episcopal Venezolana-Universidad católica Andrés Bello, 1994, pp. 735-738.

En un contexto signado por las dificultades socioeconómicas, un marco jurídico-institucional débil, una población desencantada con el liderazgo tradicional y cuyas expectativas de progreso socioeconómico se han visto sistemáticamente frustradas a lo largo de una década, con un liderazgo aferrado a sus viejas usos y costumbres y con un nuevo liderazgo poco definido y con escasa proyección y arraigo popular, la opción democrática y renovadora encuentra barreras poderosas para manifestarse y afirmarse.

Sin embargo, a pesar de los avatares y dificultades vividos en los últimos años, las encuestas de opinión siguen reportando que la mayoría de la población favorece un orden democrático respecto de uno autoritario, pero también expresa consistentemente que desea un orden

democrático diferente al actual. Corresponde al liderazgo individual y organizado comprometido con esa opción potenciar ese reservorio de adhesión a la democracia, que ha resistido el decaimiento económico, político y moral.

Para ello es crucial diseñar nuevas vías para canalizar el conflicto y construir el consenso, desarrollar mecanismos eficaces y equitativos de generación y distribución de la riqueza, y crear nuevas fórmulas ideológicas y organizativas para fomentar la participación ciudadana y la agregación y representación de intereses. Es el reto de la Venezuela post rentista, post clientelista y post tutelada.